

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiuno (2021).

Auto interlocutorio

MAGISTRADO PONENTE: JHON ERICK CHAVES BRAVO

ACCIÓN:	REPARACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE:	76001-33-33-000-2013-00579-00
DEMANDANTE:	BRUS CAIR REVELO CASAÑAS Y OTROS rafael beltran00@hotmail.com
DEMANDADO:	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN jur. notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co
ASUNTO	RESUELVE INCIDENTE DE CONDENA EN ABSTRACTO

I. ASUNTO

Procede el Despacho a pronunciarse respecto al incidente de liquidación de perjuicios propuesto por el apoderado judicial de la parte actora¹ en ocasión de la sentencia proferida por esta Corporación el 17 de octubre de 2017.

II. ANTECEDENTES

Los demandantes, a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, interpusieron demanda contra la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, con el propósito de que se declarara a la demandada responsable de todos los perjuicios causados a estos con ocasión de la privación injusta de la libertad del señor **BRUS CAIR REVELO CASAÑAS**².

Una vez surtido el trámite correspondiente al proceso de la referencia, esta Corporación, mediante sentencia del 17 de octubre de 2017, resolvió declarar a la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** administrativa y extracontractualmente responsable por los daños materiales, morales y a la vida de relación causados a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor **BRUS CAIR REVELO CASAÑAS** y, entre otras cosas, condenar en abstracto a la demandada al pago de los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, en relación con los honorarios de los abogados que ejercieron la defensa del demandante dentro del proceso penal generador de los daños cuyo resarcimiento fue ordenado³.

El 29 de enero de 2018, la apoderada judicial de la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 17 de octubre de

¹ Folios 1-8 del cuaderno nro. 3.
² Folios 92-112.
³ Folios 231 – 251 del cuaderno nro. 2.

2017 proferida dentro de este proceso, el cual fue concedido el 1 de marzo de 2018, una vez agotado el trámite de la conciliación establecido en el artículo 192 del CPACA⁴. Sin embargo, mediante auto del 30 de mayo de 2018, el Consejo de Estado dispuso inadmitir el recurso de apelación interpuesto y declarar ejecutoriada la sentencia del 17 de octubre de 2017⁵.

A través de auto del 24 de septiembre de 2018, esta Corporación dispuso: *“OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE lo resuelto por el Honorable Consejo de Estado, en su Providencia del 30 de mayo de 2018, que inadmitió el recurso de apelación del 29 de enero de 2018 por la parte demandada, contra la Sentencia del 17 de octubre de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y declaró ejecutoriada la sentencia proferida.* Dicha decisión fue notificada en estado nro. 167 del 27 de septiembre de 2018⁶ y quedó ejecutoriada el 2 de octubre de 2018.

III. TRÁMITE DEL INCIDENTE

El 13 de diciembre de 2018, el apoderado judicial de la parte demandante solicitó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 del CPACA, en concordancia con los artículos 127 y subsiguientes del C.G.P., lo siguiente⁷:

“... se sirva liquidar los perjuicios materiales, a título de daño emergente, por concepto de los honorarios pagados por el señor BRUS CAIR REVELO CASAÑAS, a los abogados defensores del proceso penal doctores Cesar Javier Castro Quiroz y José Rafael Beltrán Muñoz, en la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000,00), suma que deberá ser actualizada conforme a la siguiente fórmula:

$$VP= S \times \frac{\text{Índice Final}}{\text{Índice inicial}}$$

Donde los factores equivalen a:

VP Valor Presente
S Suma que se busca actualizar
Índice final Índice de Precios al Consumidor a la fecha del incidente regulador.
Índice inicial: Índice de Precios al Consumidor a la fecha de causación del perjuicio.

Fecha	Concepto	Valor	IPC Final	IPC inicial	Vlr. Actualización
	HONORARIOS DE ABOGADO DR. CESAR JAVIER CASTRO QUIROZ				

⁴ Folios 311-313.
⁵ Folios 338-341.
⁶ Reverso del folio 345.
⁷ Folios 1-8 cuaderno 3.

29/12/2008	VALOR INICIAL	\$28.000.000,00	142,84	99,56	\$40.171.956,61
12/02/2010	VALOR FINAL	\$12.000.000,00	142,84	102,7	\$16.690.165,53
	HONORARIOS DE ABOGADO DRD. JOSÉ RAFAEL BELTRÁN MUÑOZ				
29/12/2007	VALOR INICIAL	\$10.000.000,00	142,84	102,7	\$13.908.471,28
12/02/2010	VALOR FINAL	\$10.000.000,00	142,84	108,05	\$13.219.805,65
TOTAL GASTOS HONORARIOS ABOGADOS PROCESO PENAL ACTUALIZADO					\$83.990.399,06

Total Daño emergente a la presentación del incidente ochenta y tres millones novecientos noventa mil trescientos noventa y nueve pesos (\$83.990.399,00) M/CTE.

PETICIONES SUBSIDIARIAS:

Primera: Se tenga en cuenta los honorarios pactados al inicio del proceso:

Fecha	Concepto	Valor	IPC Final	IPC inicial	Vlr. Actualización
	HONORARIOS DE ABOGADO DR. CESAR JAVIER CASTRO QUIROZ				
29/12/2008	VALOR INICIAL	\$28.000.000,00	142,84	99,56	\$40.171.956,61
12/02/2010	VALOR FINAL	\$12.000.000,00	142,84	102,7	\$16.690.165,53
	HONORARIOS DE ABOGADO DR. JOSÉ RAFAEL BELTRÁN MUÑOZ				\$56.862.122,14

Segunda: En el caso de que no se acojan la petición principal y subsidiaria la primera, se proceda a liquidar los honorarios conforme a las actuaciones surtidas en el proceso penal, para lo cual se tendrá en cuenta la Resolución No. 001 de fecha junio 26 de 2007 expedida por el Colegio nacional de Abogados de Colombia – CONALBOS- , conforme al precedente del Consejo de Estado, y para ello debe tenerse en cuenta la actuación de los profesionales del Derecho en las etapas de asistencia a la indagatoria, etapa instructiva y la etapa del juicio, por el desarrollo de cada uno de los profesionales del derecho”.

Mediante auto del 12 de abril de 2019, el Despacho admitió el trámite incidental de liquidación de perjuicios solicitado por el apoderado de la parte accionante y corrió traslado de éste por tres días a la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 129 del C.G.P.

A través de auto del 27 de mayo de 2019, se dispuso decretar las siguientes pruebas⁸:

- *“Las constancias que reposan a folios 35 y 36 del C. Ppal. No. 1.*
- *Oficiar por la Secretaría del Tribunal al Centro de Servicios de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de San Juan de Pasto (N), para que en el término de quince (15) días hábiles contados a partir del recibido del oficio, certifique con destino a este proceso, si en el expediente penal con Radicación No. 5200131070012009-00030-00 adelantado en contra del señor Bruss Cair Revelo Casañas con C.C. No. 87.941.927 de Tumaco (N.), los Abogados Cesar Javier Castro Quiroz y José Rafael Beltrán Muñoz ejercieron la representación judicial del investigado. De ser afirmativa la respuesta, se solicita la remisión de la copia de los correspondientes poderes, y se certifique todas y cada una de las actuaciones de los referidos Abogados, indicando además en cuáles diligencias y en qué fechas actuaron”.*

Adicionalmente, se fijó el día 25 de julio de 2019 a las 10:00 a.m., como fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de que trata el artículo 129, inciso 3 del C.G.P. En la aludida fecha, el Despacho se percató de que el auto a través del cual se fijó fecha para la celebración de la audiencia no fue comunicado a las partes, razón por la cual se dispuso el cierre de la audiencia y se determinó que en auto posterior se definiría sobre la citación a la misma diligencia o sobre la resolución del incidente de manera escritural⁹.

IV. CONSIDERACIONES

I. COMPETENCIA

En virtud de lo dispuesto en el artículo 193 del CPACA, en concordancia con el artículo 20 de la ley 2080 de 2021 que modificó el artículo 125 y 243 del CPACA el ponente es competente para decidir el presente incidente de liquidación de perjuicios.

II. CADUCIDAD

Conforme al artículo 193 del CPACA, el incidente de liquidación de perjuicios deberá presentarse dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior. Vencido dicho término caduca el derecho y, en consecuencia, se debe proceder a rechazar de plano la liquidación presentada extemporáneamente.

En el presente caso el auto de obedecimiento al superior se notificó por estado el 27 de septiembre de 2018¹⁰ quedó ejecutoriado el 2 de octubre de 2018. El incidente fue presentado oportunamente el 3 de diciembre de 2018¹¹.

⁸ Folios 16-17 del cuaderno nro. 3.

⁹ Folios 26-27 del cdno. 3.

¹⁰ Reverso del folio 345.

¹¹ Folios 1-8 del cdno. 3.

Adicionalmente, a través de auto del 26 de julio de 2019, se ordenó requerir por la Secretaría de este Tribunal, al Centro de Servicios de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Pasto (N) para que remitiera las pruebas que fueron decretadas mediante auto del 27 de mayo de 2019¹².

La prueba decretada fue aportada al plenario el 3 de septiembre de 2019¹³.

III. ANÁLISIS DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS

En primer lugar, es necesario señalar que los parámetros para el estudio del presente incidente de liquidación de perjuicios derivan de la condena en abstracto impuesta por este Tribunal, la cual se fundamentó de la siguiente manera:

“Por otra parte y en lo que atañe a la reparación de los perjuicios materiales en el componente de daño emergente causados con ocasión de los honorarios que no fueron cancelados a los abogados que ejercieron su defensa dentro del proceso penal, el Consejo de Estado ha establecido que es claro que los gastos de honorarios profesionales en que se haya incurrido para la defensa legal de quien estuvo privado de la libertad, constituye un daño emergente que debe ser reparado en la medida que se compruebe, al menos, la gestión del abogado y el pago por los servicios prestados para que se le reconozca tal perjuicio a quien asumió el gasto.

Conforme a lo anterior, la Sala considera que si bien dentro del expediente obran certificaciones de los abogados José Rafael Beltrán Muñoz y Cesar Javier Castro Quiroz, en donde se acreditó que los mismos ejercieron la defensa del demandante y los valores que fueron cancelados por concepto de honorarios, lo cierto es que en las constancias que obran a folios 35 y 36 del cdno. No. 1, coinciden en que ambos apoderados ejercieron durante la etapa inicial del proceso No. 2336-55 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Cali, y teniendo en cuenta la prohibición contenida en el inciso 2º del artículo 134 del Código de Procedimiento Penal – Ley 600 de 2000, acerca de que los apoderados no pueden actuar simultáneamente, este Tribunal, si bien concluye que hubo el ejercicio de tal defensa, ante la duda de las condiciones y el monto de lo pagado, proferirá condena en abstracto”.

A fin de resolver el presente incidente se debe precisar lo siguiente:

El Código Civil establece que el contrato legalmente celebrado es ley para las partes, por lo que sólo puede ser invalidado por mutuo consentimiento de los contratantes o por causas legales, en este evento, mediante sentencia judicial. Igualmente, el ordenamiento prevé que los contratos son obligatorios en cuanto a ellos pertenece por su esencia, naturaleza y lo especialmente pactado.

¹² Folios 28-29 del cdno. 3.

¹³ Folios 32-42 del cdno. 3.

En la sentencia del 17 de octubre de 2017, resolvió declarar a la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** administrativa y extracontractualmente responsable por los daños materiales, morales y a la vida de relación causados a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor **BRUS CAIR REVELO CASAÑAS** y, entre otras cosas, condenar en abstracto a la demandada al pago de los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, en relación con los honorarios de los abogados que ejercieron la defensa del demandante dentro del proceso penal generador de los daños, por cuanto a pesar de la existencia de prueba de su generación y pago se trataba del actuar de dos profesionales del derecho, cuando la normativa permite solo la actuación de un profesional.

Conforme a las pruebas recaudadas en el trámite incidental, la Sala evidencia lo siguiente:

Según constancia suscrita el 15 de octubre de 2012 por el abogado JOSÉ RAFAEL BELTRÁN MUÑOZ, éste actuó al inicio como apoderado judicial en el proceso penal identificado con el número 2336-55 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Cali y en la etapa de juicio, dentro del proceso número 2009-000-30-00 que se adelantó contra el señor BRUS CAIR REVELO CASAÑAS. Que por la prestación de sus servicios le fue cancelada la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000): la mitad de dicho valor, al inicio y el restante, al finalizar el proceso.

Según constancia suscrita por el abogado CÉSAR JAVIER CASTRO QUIROZ, éste actuó como apoderado judicial en el proceso penal nro. 2336 -55 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Cali, que se adelantó contra el señor BRUS CAIR REVELO CASAÑAS. Que por la prestación de sus servicios le fue cancelada la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000): el 70% al inicio y el restante cuando fue sustituido el poder, en la etapa de juicio.

Adicionalmente, conforme a la constancia expedida por el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Pasto¹⁴, los abogados CESAR JAVIER CASTRO QUIROZ y JOSÉ RAFAEL BELTRÁN MUÑOZ actuaron como apoderados del señor BRUSS CAIR REVELO, dentro del proceso penal identificado con el número de radicación 2009-00030, adelantado contra éste por el delito de homicidio agravado y otros.

Al cotejar la información brindada en el material probatorio referenciado, se puede colegir que, en efecto, el señor BRUSS CAIR REVELO contrató los servicios de ambos profesionales y realizó el pago de honorarios a los abogados CESAR JAVIER CASTRO QUIROZ y JOSÉ RAFAEL BELTRÁN MUÑOZ, por la

¹⁴ Folios 33-36 del cdno. 3.

representación que estos ejercieron dentro del proceso penal que dio origen a la privación injusta de la libertad que, a su vez, motivó la presentación de la demanda de la referencia.

Al cotejar las certificaciones efectuadas por los apoderados con la expedida por el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Pasto, se tiene que:

- El primer pago (\$10.000.000) efectuado al abogado JOSÉ RAFAEL BELTRÁN MUÑOZ, se materializó al iniciar el proceso, es decir, el 31 de diciembre de 2008, fecha en la que se adelantó la diligencia de indagatoria del señor BRUS CAIR REVELO.
- El segundo pago (\$10.000.000) realizado al abogado JOSÉ RAFAEL BELTRÁN MUÑOZ se llevó a cabo al finalizar el proceso, esto es, el 5 de agosto de 2011, fecha en la que se notificó a los sujetos procesales de la sentencia absolutoria y en la que ésta cobró ejecutoria.
- El primer pago (\$28.000.000) efectuado al abogado CÉSAR JAVIER CASTRO QUIROZ se dio al iniciar el proceso, el 31 de diciembre de 2008.
- El segundo pago (\$12.000.000) al abogado CÉSAR JAVIER CASTRO QUIROZ se llevó a cabo el 21 de diciembre de 2010, fecha en la que asumió la representación del señor BRUS CAIR REVELO CASAÑAS el abogado JOSÉ RAFAEL BELTRÁN MUÑOZ.
- En la misma certificación se detalla que la actuación del abogado JOSÉ RAFAEL BELTRÁN MUÑOZ, actuó en la diligencia de indagatoria, hasta la definición de la situación jurídica, posteriormente asume en la audiencia de juicio, y el abogado CÉSAR JAVIER CASTRO QUIROZ en actuaciones intermedias como la calificación del sumario, peticiones de prueba y audiencia preparatoria.

Sin embargo, la Sala Plena de la Sección Tercera, mediante sentencia de 18 de julio de 2019, al unificar su jurisprudencia en orden a definir criterios en torno al reconocimiento y a la liquidación del perjuicio material, señaló:

“que, tratándose de honorarios profesionales prestados por abogados, la factura o su documento equivalente es la prueba idónea para demostrar el pago. En esa oportunidad se precisó⁵⁹: **“Tratándose del reconocimiento del daño emergente derivado del pago de honorarios profesionales del abogado que intervino en defensa de quien fue privado injustamente de la libertad, esta Sección ha admitido como prueba de ese perjuicio la documental consistente en los recibos de pago que dan cuenta de la cancelación de los honorarios profesionales⁶⁰ y, en su defecto, las certificaciones emitidas por los profesionales del derecho, acerca del pago de sus honorarios⁶¹ . “Sin embargo, debe recordarse que el artículo 615 del Estatuto Tributario dispone que las personas que ejercen profesiones liberales, es decir, profesiones en las cuales “... predomina el ejercicio del intelecto, que han sido reconocidas por el Estado y para**

cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través de un título académico”⁶² , están obligadas a “... expedir factura o documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales”. “En virtud de lo anterior, debe entenderse que, como el derecho es una profesión liberal, quienes lo ejercen están obligadas a expedir la respectiva factura o su documento equivalente (el cual debe satisfacer los requisitos previstos en el artículo 617 del mismo estatuto⁶³); **por tanto, si los abogados están obligados a expedir una factura por el valor de sus honorarios profesionales, es dable concluir que ésta es la prueba idónea del pago. “Así, en armonía con las referidas normas tributarias, en los eventos de privación injusta de la libertad, cuando el demandante pretenda obtener la indemnización del daño emergente derivado del pago de honorarios profesionales cancelados al abogado que asumió la defensa del afectado directo con la medida dentro del proceso penal, quien haya realizado el pago deberá aportar: i) la prueba de la real prestación de los servicios del abogado y ii) la respectiva factura o documento equivalente expedido por éste, en la cual se registre el valor de los honorarios correspondientes a su gestión y la prueba de su pago, de suerte que, si solo se aporta la factura o solo se allega la prueba del pago de la misma y no ambas cosas, no habrá lugar a reconocer la suma pretendida por concepto de este perjuicio”(Resalta el ponente).**

En este sentido el art 615 del ET señala:

“Para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales^{<1>}.”

Para quienes utilicen máquinas registradoras, el documento equivalente será el ticket expedido por ésta”.

El artículo 616-1 del ET señala:

La factura de venta o documento equivalente se expedirá, en las operaciones que se realicen con comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales.

Son sistemas de facturación, la factura de venta y los documentos equivalentes. La factura de talonario o de papel y la factura electrónica se consideran para todos los efectos como una factura de venta.

Los documentos equivalentes a la factura de venta corresponderán a aquellos que señale el Gobierno nacional

Por su parte el artículo 617 establece los requisitos de las facturas.

Por ello, se advierte que al margen de la forma en que se pactó la remuneración de los servicios profesionales, en el presente caso y si bien se aportaron la prueba de las actuaciones de los apoderados, la constancia de pago de los honorarios, sin embargo, en los contornos de la sentencia de unificación no se aportó la factura o el documento equivalente expedido por el profesional del derecho que afirmó haber recibido el pago y que cumpla los requisitos del art 617 del ET, circunstancia que, en los términos de la precitada sentencia de unificación, impide tener por acreditado dicho pago.

Por lo expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la fijación y reconocimiento de los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, en relación con los honorarios de los abogados que ejercieron la defensa del demandante dentro del proceso penal generador de los daños.

SEGUNDO: En firme esta providencia procédase al archivo del expediente previo a las anotaciones y registros a que dé lugar en el sistema de información judicial Siglo XXI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

El magistrado,


JHON ERICK CHAVES BRAVO